



Alertan grave crisis social en el sector rural por alza de bencinas

PROVINCIA. El incremento significó un alza en los pasajes que son clave para acceder a salud, educación, fuentes laborales, abastecimiento, entre muchos otros servicios. Dirigentes y vecinos del campo apuntan al nulo apoyo de las autoridades frente a un problema que los deja sin opciones, dado que el impacto económico terminó de empobrecer a las familias que incluso deberán restringir la energía eléctrica, ya que en la mayoría de los casos es con generadores diésel.



EL ALZA DE PASAJES A SECTORES RURALES SE CONCRETÓ CASI EL MISMO DÍA QUE SUBIÓ LA BENCINA Y EL DIESEL EN LA PROVINCIA DE OSORNO.

Verónica Salgado
veronica.salgado@australosorno.cl

En la provincia, más de 52 mil personas habitan en distintos sectores de las siete comunas, desempeñando por décadas un rol clave para la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y la preservación cultural. Sin embargo, esta relevancia contrasta con el nivel de reconocimiento y apoyo estatal, ya que -según acusan dirigentes y vecinos- el mundo rural ha sido sistemáticamente postergado por los distintos gobiernos de turno.

El reciente aumento en el precio de los combustibles ha profundizado una crisis social en las zonas rurales, debido a múltiples factores. Entre ellos, el alza en las tarifas del transporte público rural, que en algunos casos alcanza al menos

\$500 por pasaje, impactando directamente en la economía de las familias campesinas, que en su mayoría dependen de estos recorridos para acceder a servicios básicos como salud, educación, trabajo, centros de abastecimiento, entre otros.

A ello se suma el encarecimiento del costo de la vida, que no sólo incluye bienes de consumo básico, sino también insumos necesarios para huertos, crianza de animales y otras actividades productivas, tanto para el autoconsumo como para pequeños emprendimientos. Asimismo, se ve afectada la calidad de vida, considerando que muchas familias dependen de generadores diésel para acceder a agua potable o electricidad, lo que las obliga a restringir su uso ante el aumento de los costos, en un contexto de ingresos bajos y limitados.

Así lo advierten dirigentes y

habitantes de distintos sectores de la provincia, quienes apuntan al escaso apoyo de las autoridades frente al alza de los combustibles, lo que los deja sin mayores alternativas. Aseguran que, en las diversas crisis que ha enfrentado el país, el mundo rural suele quedar relegado, citando como ejemplo lo ocurrido durante la pandemia, cuando, afirman, muchas comunidades fueron marginadas territorialmente debido a cordones sanitarios y a la exigencia de acceso digital, tecnología que aún no está disponible en amplias zonas rurales.

De acuerdo con estudios del Ministerio de Agricultura, el 76% de las comunas del país (236 de un total de 345) están clasificadas como rurales. En la provincia de Osorno, sólo la comuna de Osorno es considerada urbana, mientras que las otras seis son categorizadas como rurales.

A nivel nacional, sólo el

“Es como si quisieran que el campo desaparezca, porque los emprendedores rurales no podrán sostenerse. No existen subsidios ni políticas públicas adecuadas para territorios con baja densidad poblacional, pese a su importancia en la cadena alimentaria”.

Margarita Carrillo
dirigente de Puerto Octay

53% de la población rural tiene acceso a la red pública de agua potable. En la provincia de Osorno, esta realidad se refleja en que más de 6 mil familias dependen del suministro mediante camiones aljibe. Asimismo, existen 59 comunas rurales en el país que no cuentan con farmacia y 86 que no tienen sucursal bancaria, siendo este último el caso de San Juan de la Costa.

A este escenario se suman indicadores sociales preocupantes: la tasa de pobreza en zonas rurales alcanza el 16,5%; la informalidad laboral llega al 65%; y un 25% de la población rural se desempeña en actividades agrícolas, forestales o pesqueras. Además, sólo el 16% tiene acceso a banda ancha y el 39% de los hogares presenta condiciones de vivienda precaria.

UN GOLPE LETAL

Juan Alvarado, residente del

sector de Pucopío, en San Juan de la Costa, relató que el transporte público es fundamental para la conectividad de las familias.

“Resulta muy complicado, porque el alza en los pasajes se aplicó de forma inmediata tras el aumento del combustible, sin posibilidad de reclamo, ya que dependemos de los operadores que fijan las tarifas. No los culpamos, porque sabemos que asumen altos costos para prestar servicio en zonas rurales, pero esto ocurre porque el Estado nunca ha considerado mejorar los mecanismos de financiamiento, dejando a la gente del campo a su suerte. Muchos viajamos al menos tres veces por semana a Osorno para vender nuestros productos y esto nos afecta, porque quedamos prácticamente sin ganancias, que son nuestro sustento. Parece que la gente del campo no existe”, sostuvo.

María Loyola, quien ha

